



Consejo Económico y Social

Distr. general
17 de diciembre de 2014
Español
Original: francés

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales

51º período de sesiones

Acta resumida de la 41ª sesión

Celebrada en el Palais Wilson, Ginebra, el martes 12 de noviembre de 2013, a las 10.00 horas

Presidente: Sr. Ribero Leao

Sumario

Examen de los informes

- a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (*continuación*)

Informe inicial y segundo informe periódico combinados de Djibouti

La presente acta podrá ser objeto de correcciones.

Las correcciones deberán redactarse en uno de los idiomas de trabajo. Deberán presentarse en forma de memorando, incorporarse en un ejemplar del acta y enviarse, *dentro del plazo de una semana a partir de la fecha del presente documento*, a la Dependencia de Edición, oficina E.5108, Palacio de las Naciones, Ginebra.

Las correcciones que se introduzcan en las actas de las sesiones públicas del Comité se reunirán en un documento único que se publicará poco después del período de sesiones.

GE.13-48523 (S) 121214 171214



* 1 3 4 8 5 2 3 *

Se ruega reciclar



Se declara abierta la sesión a las 10.10 horas.

Examen de los informes

a) Informes presentados por los Estados partes en virtud de los artículos 16 y 17 del Pacto (tema 6 del programa) (continuación)

Informe inicial y segundo informe periódico combinados de Djibouti (E/C.12/DJI/1-2; documento básico (HRI/CORE/DJI/2010); lista de cuestiones (E/C.12/WG/DJI/Q/1-2); respuestas escritas del Gobierno de Djibouti a la lista de cuestiones (E/C.12/DJI/Q/1-2/Add.1) (continuación)

1. *Por invitación del Presidente, la delegación de Djibouti toma asiento a la mesa del Comité.*

Artículos 1 a 5 del Pacto (continuación)

2. **La Sra. Shin**, refiriéndose al hecho de que hay en Djibouti dos sistemas jurídicos, dice que el Estado parte debería abolir el sistema de leyes religiosas con el fin de permitir que las mujeres disfruten plenamente de sus derechos. La oradora pregunta si Djibouti tiene previsto derogar las disposiciones del Código de la Familia que discriminan a las mujeres con respecto a los derechos sucesorios. En cuanto a las brechas salariales entre hombres y mujeres, no es suficiente garantizar la igualdad de remuneración por igual trabajo, sino que las mujeres también deben tener acceso a empleos bien remunerados en pie de igualdad con los hombres.

3. **La Sra. Kayad** (Djibouti) dice que, mientras que la mayoría de los cargos que entrañan la toma de decisiones todavía están ejercidos por hombres, esta tendencia se está revirtiendo gradualmente. De hecho, el aumento de la matriculación de niñas en la escuela les proporciona un mayor acceso a empleos bien remunerados. Si bien es cierto que el sector no estructurado emplea a un gran número de mujeres, también representa una importante fuente de ingresos para algunas mujeres, especialmente en el comercio minorista. El Gobierno está estudiando actualmente medidas para formalizar el sector no estructurado, de modo que los ingresos obtenidos por las mujeres en ese sector se puedan computar en el producto interno bruto (PIB) del país. El Ministerio de Promoción de la Mujer, consciente de que las tradiciones están socavando los derechos laborales de las mujeres, ha establecido una red de instructores encargados de impartir formación sobre la igualdad entre los géneros a los funcionarios públicos de varios ministerios. El Gobierno apoya el acceso de las mujeres a la educación y a los cargos que entrañan la toma de decisiones, y prevé incrementar sus esfuerzos en esta esfera.

4. **El Sr. Hersi** (Djibouti) dice que las relaciones interpersonales no se rigen en Djibouti por las normas del derecho consuetudinario. El Estado ha tratado de uniformar sus leyes en los últimos 20 años. Así, en 2002 se promulgó el Código de la Familia, basado en el derecho civil, la *sharia* y el derecho consuetudinario; el Código de la Familia es aplicable en todo el país. Djibouti ha establecido medidas de salvaguardia para mitigar los efectos de las disposiciones del Código que parecen estar en contradicción con las del Pacto, incluso mediante la prohibición del repudio y del otorgamiento a las mujeres del derecho a presentar una demanda de divorcio en pie de igualdad con los hombres. Además, los conflictos familiares ya no son resueltos por los cadíes sino por los jueces de familia. Las disposiciones del Código de la Familia relativas a los derechos sucesorios se basan en la *sharia*. Cabe señalar que el marido, como jefe de la familia, tiene más responsabilidades que la mujer, incluida la obligación de mantener a su familia y educar a sus hijos. No obstante, es cierto que es cada vez más común que las mujeres asuman esas responsabilidades, pero la legislación es flexible y puede evolucionar con el tiempo.

5. El número de casos de violencia doméstica en Djibouti no es lo suficientemente grande como para justificar la adopción de una ley específica sobre el tema. Las disposiciones del Código Penal, que prohíben todas las formas de violencia, son suficientes. Sin embargo, con el fin de informar a las mujeres acerca de sus derechos, el Ministerio de Promoción de la Mujer, en colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos y las organizaciones no gubernamentales que se ocupan de los derechos de la mujer, ha elaborado una guía de información sobre la violencia doméstica, destinada a las mujeres. La Unión de Mujeres de Djibouti también ha creado un servicio de asesoramiento para las víctimas de la violencia doméstica.

6. **El Sr. Abdoukader** (Djibouti) dice que el comité nacional encargado de la reforma legal tiene siempre en cuenta las disposiciones del Pacto en la labor que está llevando a cabo para poner la legislación del Estado en consonancia con las normas internacionales. El servicio de asesoramiento a las víctimas de la violencia doméstica es una víctima de su propio éxito, ya que su carga de trabajo ha superado con creces su capacidad. Y, sin embargo, solo unos 50 casos de violencia doméstica fueron llevados ante los tribunales cada año. No hay ninguna razón para adoptar una ley específica sobre la violencia doméstica porque el artículo 334 del Código Penal ya tipifica como delito los actos de violencia. La legislación del país no exige que las mujeres obtengan el permiso de su marido para trabajar y tampoco se autoriza el matrimonio forzado. De conformidad con el Código de la Familia, el matrimonio solo se puede contraer con el consentimiento de ambos cónyuges y el tutor de la esposa. Los menores de edad no pueden contraer matrimonio sin el consentimiento de su tutor. Si el tutor se niega a aceptar el matrimonio, la cuestión debe ser decidida por un juez. Es verdad que hay niños de la calle en Djibouti, pero su número ha disminuido. La mayoría de los niños que proceden de países vecinos o los niños cuyos padres han muerto por el VIH/SIDA son atendidos por asociaciones o por servicios del Estado.

7. **El Sr. Sadi** dice que, en las familias modernas, es a veces la esposa la que mantiene a su esposo y a los hijos. En la práctica, las esposas aún deben solicitar la autorización de sus maridos para trabajar, aunque la ley no las obliga a hacerlo. Ni un juez ni los padres del niño pueden autorizar su matrimonio. El Estado parte debería derogar las disposiciones del Código de la Familia que autoriza a los jueces a pronunciarse sobre estos casos.

8. **La Sra. Bras Gomes** comparte la opinión del Sr. Sadi, de que se debe a las prácticas tradicionales el hecho de que las esposas estén obligadas a obtener el permiso de sus esposos para trabajar. Quizá el problema se deriva de la interpretación del artículo 31 del Código de la Familia. La oradora pregunta si Djibouti está haciendo lo suficiente para modificar las actitudes.

9. **La Sra. Kayad** (Djibouti) dice que está en marcha una reforma del Código de la Familia, con la finalidad de incorporar disposiciones que traten a las mujeres de manera más justa. Bajo ninguna circunstancia, un hombre puede reclamar la herencia de su esposa. Las esposas tienen libertad para hacer lo que deseen con sus bienes y pueden adquirir inmuebles sin el consentimiento del marido. Además, como resultado de la crisis económica, los hombres alientan cada vez más a sus esposas a que trabajen. Con el fin de combatir las prácticas nocivas para la mujer, que aún son comunes en las zonas rurales, el Ministerio de Promoción de la Mujer está llevando a cabo campañas de sensibilización para informar a los habitantes de las zonas rurales sobre los derechos de las mujeres y el Código de la Familia. Los tabúes acerca de la violencia contra las mujeres han desaparecido, gracias al servicio de asesoramiento existente. Las mujeres ya no dudan en ejercer sus derechos. Así, el artículo 31 del Código de la Familia no es la única norma aplicable a los derechos de la mujer. El matrimonio forzado persiste solo en ciertas comunidades rurales de grupos minoritarios.

Artículos 6 a 12 del Pacto

10. **El Sr. Abdillahi** (Djibouti) dice que la tasa de crecimiento del país, que actualmente se sitúa en torno al 5%, no es suficiente para reducir la pobreza o para mejorar la situación del empleo. El Gobierno cree que una tasa de crecimiento del 7% o superior permitiría que el país avance en esas esferas. A fin de lograr ese objetivo, el Gobierno se propone fortalecer las ventajas comparativas de la economía del país y diversificar su modelo de crecimiento. En consecuencia, planea invertir en el sector de la logística y el transporte. También ha tomado medidas para desarrollar los sectores de la banca y de las telecomunicaciones. Con el fin de mitigar los efectos de la inflación importada, el Gobierno decidió abolir los impuestos sobre los bienes de primera necesidad a partir de 2008. Esta medida ha dado sus frutos, ya que, según las proyecciones, la tasa de inflación, que se mantuvo en torno al 5% en 2012, debería descender hasta el 2% o el 3% en el ejercicio económico de 2013-2014.

11. **El Sr. Ibrahim** (Djibouti) da lectura a los artículos 22 a 24 de la Ley N° 107/AN/10/6L, de 21 de febrero de 2011, sobre la organización del Ministerio de Empleo, Integración y Formación Profesional, que rigen la función y la organización de los servicios de inspección del trabajo y las leyes laborales. Las normas que garantizan la independencia de los inspectores de trabajo aún no se han adoptado y esos inspectores no pueden ordenar el cierre de una empresa que haya violado las leyes laborales. En cambio, determinan los delitos que se hayan cometido y preparan un informe, que envían al fiscal para su tramitación posterior.

12. El 26 de diciembre de 2011, cuando se renovó el convenio colectivo entre el Ministro de Trabajo responsable de la reforma de la administración y el Secretario General de la Unión General de Trabajadores de Djibouti, el Gobierno aumentó el salario mínimo de las personas que trabajan contractualmente para el Estado, que ahora asciende a 36.000 francos de Djibouti (200 dólares de los Estados Unidos). Alrededor de las tres cuartas partes de esas personas se han beneficiado de dicho aumento. Aunque Djibouti ha sido uno de los primeros Estados en firmar el Convenio N° 26 sobre los Métodos para la Fijación de Salarios Mínimos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), cuya aplicación dio lugar al establecimiento de un salario mínimo garantizado, esa medida fue abolida por el artículo 31 de la Ley N° 140/AN/97/3L de 1997, que modificó el Código del Trabajo de 1952, a raíz de la ejecución del programa de ajuste impuesto por el Fondo Monetario Internacional.

13. **La Sra. Kayad** (Djibouti) dice que actualmente se está aplicando una estrategia nacional de microfinanzas para el período 2013-2017 y un plan de acción conexo. Se han establecido cooperativas de ahorro y de crédito en la capital y en las cinco regiones del país, y el 65% de sus miembros son mujeres que trabajan principalmente en el sector primario o en el comercio minorista. Por medio de estas cooperativas, ya se han distribuido 6,8 millones de dólares y más de 700.000 dólares se han depositado como ahorros. Un proyecto islámico de microfinanzas se está ensayando actualmente.

14. El sistema oficial de seguridad social protege a los empleados del sector privado, a las personas que trabajan para el Estado (ya sea como funcionarios o de forma contractual) y a los trabajadores por cuenta propia. La Asamblea Nacional está examinando actualmente un proyecto de ley de seguro de salud universal, aprobado ya por el Gobierno. Con arreglo a ese proyecto, las personas extremadamente pobres o vulnerables quedarán protegidas por un programa específico. A este respecto, las autoridades competentes están trabajando para determinar quintiles, que se utilizarán para definir las categorías de las personas protegidas por el programa. Las personas con discapacidad y los huérfanos estarán cubiertos automáticamente.

15. Los viudos y las viudas tienen actualmente igual acceso a las pensiones de viudedad. El sistema de pensiones militares, que es independiente del sistema general, se pondrá pronto en consonancia con el sistema general de pensiones. Solo las personas de edad que hayan contribuido al sistema general tendrán derecho a recibir los beneficios de este sistema. Por último, no hay prestaciones de desempleo en Djibouti.

16. **El Sr. Atangana** pregunta acerca del papel desempeñado por los servicios de inspección del trabajo en la solución de las controversias laborales y de qué forma están representados ante los tribunales.

17. **La Sra. Bras Gomes** pregunta si el Estado parte prevé adoptar un plan de acción global sobre el empleo y si se propone solicitar la asistencia de la OIT para establecer las bases de la cobertura del sistema de seguridad social. Pide a la delegación que aclare de qué manera se establecerán los criterios para definir los niveles de pobreza.

18. **El Sr. Martynov** pide a la delegación que aclare cuál es la situación de las personas que trabajan para el Estado de forma contractual.

19. **La Sra. Shin** pregunta si la edad de jubilación es la misma para los hombres y las mujeres que trabajan en el sector público. Desea saber cuántas mujeres ocupan cargos que entrañan la toma de decisiones, cuántas han sido elegidas para el Parlamento y cuántas desempeñan puestos de alto nivel en el poder judicial.

20. **La Sra. Kayad** (Djibouti) dice que se han adoptado varias medidas para mejorar la tasa de empleo de los jóvenes y las mujeres, y en particular para mejorar su acceso al microcrédito. Además, el Ministerio de Educación Superior e Investigación ha comenzado a modificar los cursos, a fin de que la formación impartida se adapte mejor a las necesidades del mercado de trabajo local. El registro de las personas extremadamente pobres se estableció sobre la base de un cuestionario que proporciona información socioeconómica y demográfica sobre las personas vulnerables. El registro permitirá adoptar medidas más eficaces para combatir la pobreza y determinar los recursos asignados para ese propósito.

21. **El Sr. Ibrahim** (Djibouti) dice que los inspectores de trabajo realizan visitas a las empresas para verificar su cumplimiento del Código del Trabajo, en particular con respecto al horario de trabajo y a la representación sindical, y para controlar la salud y la seguridad ocupacional. La edad de jubilación es de 60 años, tanto para los hombres como para las mujeres, aunque las mujeres pueden solicitar la jubilación a partir de los 55 años de edad.

22. **La Sra. Kayad** (Djibouti) dice que inicialmente las personas que trabajan para el Estado contractualmente fueron empleadas de forma temporal. Sus contratos se han ampliado y actualmente representan la mitad de las aproximadamente 8.000 personas empleadas por el Estado. Aunque inicialmente realizaban trabajos subalternos, actualmente ya no es así. Su nivel salarial es ligeramente superior al de los funcionarios públicos ordinarios y pueden ser incluidas en el seguro de salud contractual. El Gobierno está examinando actualmente la posibilidad de integrarlos en la función pública sin que ello signifique una carga financiera excesiva para el Estado.

23. **El Sr. Abdillahi** (Djibouti) dice que, desde 2008, cerca de 120.000 personas que viven en la capital o sus alrededores se han visto afectadas por una sequía sin precedentes que hace descender la tasa de crecimiento económico del país en un 1% anual. La escasez de lluvias (150 mm por año) y el aumento de las temperaturas han inducido a las autoridades a tomar medidas para aliviar el problema, tanto en las zonas urbanas como en las rurales. Con respecto a las zonas urbanas, se está reparando la red de abastecimiento de agua en la capital y se ha firmado un acuerdo con la Unión Europea, a fines de 2012, para construir una planta de desalinización del agua de mar, que debería estar en funcionamiento en 2016, con una capacidad inicial de 22.500 metros cúbicos diarios y más adelante de

45.000 metros cúbicos diarios. Se ha firmado un acuerdo con Etiopía para llevar a cabo un proyecto destinado a suministrar agua potable desde Etiopía a Djibouti en el plazo de cuatro años. El proyecto resolverá el problema del agua en la capital y en las principales ciudades de las regiones por medio de la construcción de un acueducto entre los dos países. Además, el plan maestro de saneamiento, que incluye una planta de aguas residuales, se inaugurará a comienzos de 2014; 25.000 hogares estarán conectados a la nueva red de saneamiento, incluso en los principales barrios de Balbala.

24. En las zonas rurales, se ha establecido un programa de movilización de las aguas superficiales para promover la construcción de tanques de almacenamiento subterráneo, a fin de aumentar la capacidad de almacenamiento y de retención de agua, con el objetivo de ayudar a que los habitantes afectados preserven su ganado. Existen planes para construir varias presas con la ayuda del Banco Africano de Desarrollo, con el fin de favorecer el desarrollo agrícola y la actividad económica en las zonas rurales. Las tierras cultivables adquiridas en régimen de concesión en el Sudán (10.000 hectáreas) y Etiopía (7.000 hectáreas) forman parte de un enfoque innovador iniciado en 2005, tras un período de dos años de estudio, que proporcionará al menos la mitad del suministro de alimentos del país.

25. **La Sra. Kayad** (Djibouti) dice que el Organismo Nacional del Agua y el Saneamiento de Djibouti es una empresa pública que gestiona el abastecimiento de agua potable para todo el país. Los barrios de la ciudad de Djibouti y otras comunidades que no están conectadas a la red reciben el abastecimiento de agua por medio de fuentes públicas y, en la periferia, por medio de camiones cisterna; lo mismo sucede en las comunidades rurales que no cuentan con sus propios recursos hídricos. Las poblaciones y las comunidades rurales participan en todos los proyectos de perforación de pozos por medio de comités locales de gestión del agua. También son responsables de la protección y el mantenimiento de la red local. Toda persona que considera que ha sido privada del acceso al agua puede presentar una queja ante la Oficina del Ombudsman, que a su vez puede presentar el caso ante el tribunal administrativo.

26. La Iniciativa Nacional para el Desarrollo Social, que actualmente es una parte fundamental de las políticas públicas de lucha contra la pobreza, se basa en el principio de que el desarrollo y el crecimiento ayudarán a aliviar la pobreza, pero, mientras llegan resultados tangibles, el Estado ha creado redes de seguridad social para los grupos vulnerables, en particular mediante el establecimiento de la Secretaría de Estado contra la Pobreza y la Secretaría de Estado de Solidaridad Nacional. Con el objeto de tratar de reducir la pobreza extrema, que sigue estando generalizada, se ha creado un fondo nacional de solidaridad para financiar programas destinados a los jóvenes, la salud y la educación nacional, esferas que constituyen prioridades nacionales. Los migrantes tienen acceso a los servicios de salud y de educación en condiciones de igualdad con los nacionales de Djibouti y, debido a ello, esos servicios están sobrecargados. El Gobierno está tratando de identificar con más precisión los problemas a fin de evitar los embotellamientos y elaborar y aplicar políticas públicas más sostenibles. Se ha iniciado un amplio programa de eliminación de barrios marginales, y las personas vulnerables que viven en esos barrios en condiciones precarias serán reubicadas en viviendas alternativas. El Estado parte tiene previsto construir 1.000 viviendas sociales cada año y preparar sitios en los que se construirán esas viviendas, que recibirán los servicios pertinentes.

27. La tasa de mortalidad materna es de 383 por cada 100.000 nacidos vivos. Los centros de salud distribuyen anticonceptivos de forma gratuita y las mujeres embarazadas tienen derecho a tres consultas prenatales gratuitas. Se han establecido grupos médicos regionales, que consisten en un hospital y centros de salud ubicados en las comunidades. Además, el médico jefe del hospital regional, junto con un equipo móvil que incluye una enfermera y parteras, celebra consultas en los diferentes centros de salud.

Durante esas consultas, alientan a las mujeres a que opten por dar a luz en una institución sanitaria. Se ha llevado a cabo una campaña para promover los medicamentos genéricos en los hospitales y los centros de salud. También se alienta a las farmacias de las comunidades y los dispensarios privados a que vendan medicamentos genéricos, que tienen un precio inferior a los productos de marca. La atención prestada a las personas que tienen trastornos psiquiátricos es insuficiente, debido a la falta de personal cualificado y de instalaciones adecuadas. De hecho, solo hay un centro especializado, que está en el hospital de la capital, y el Gobierno tendrá que hacer serios esfuerzos para remediar esa escasez de servicios especializados de salud mental.

28. **El Sr. Hersi** (Djibouti) dice que los inspectores de trabajo son responsables de asegurar el cumplimiento de la legislación laboral y de actuar como conciliadores y mediadores entre las empresas y sus empleados. En los casos en que no pueden resolver una controversia, envían un informe de no conciliación a la fiscalía, que a su vez remite el caso a un juez del trabajo para que el asunto se resuelva en los tribunales. La Constitución de Djibouti establece el derecho de todas las personas a tener acceso a la justicia. Desde su independencia, en 1977, la República de Djibouti tuvo que capacitar a funcionarios judiciales, jueces y secretarios locales, que hasta entonces habían estado bajo la responsabilidad del Ministerio de Ultramar y del Ministerio de Justicia de Francia. La edad media de los jueces, que actualmente son 134, es de 30 años. Las mujeres constituyen el 45% del personal judicial y, en algunos casos, ocupan puestos prominentes, incluida la presidencia del Tribunal Supremo y del Tribunal de Apelación. El Gobierno también ha establecido una infraestructura judicial y ha construido edificios para tribunales en todo el país. Con el fin de garantizar el acceso a la justicia para todos, se organizaron tribunales de circuito una vez que las oficinas judiciales de las principales ciudades habían recibido un número suficiente de reclamaciones. Los acusados que no disponen de medios para contratar a un abogado tienen derecho a recibir asistencia jurídica, concedida por el juez de asuntos no contenciosos. Se ha establecido un servicio público de información y referencia, accesible a través de una línea telefónica, para informar al público sobre los procedimientos que se deben seguir para interponer una acción.

Artículos 13 a 15 del Pacto

29. **El Sr. Mancisidor** pregunta en qué medida las limitaciones impuestas a la libertad de prensa y la libertad de expresión, en particular la denegación de acceso a sitios web y estaciones de radio extranjeros, ponen en peligro el intercambio de materiales artísticos, culturales y científicos, tanto a nivel nacional como internacional.

30. **La Sra. Ravenberg** pregunta si los niños que viven en las comunidades nómadas se han incluido en el plan maestro de educación para el período 2010-2019, y en qué medida se ha aplicado el plan en los tres años transcurridos desde su lanzamiento. También desea saber si el plan maestro incluye una estrategia a fin de hacer frente a las dificultades para llegar a la escuela que tienen los niños de algunas zonas rurales remotas, debido al hecho de que la escuela más cercana está a veces a medio día o un día de distancia a pie.

31. **La Sra. Shin** pregunta acerca de la tasa de abandono escolar y de los principales factores que hacen que los niños abandonen sus estudios. Pregunta si el acoso sexual en las escuelas está prohibido por la ley y si se están adoptando medidas para impedir que los directores, los maestros y los estudiantes mayores abusen sexualmente de las alumnas. Por último, desea saber cuántas mujeres asisten a la universidad y, de ellas, cuántas son mujeres con discapacidad.

32. **El Sr. Marchán Romero** pregunta si el Estado parte se propone ratificar el Convenio N° 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales, de la OIT. Pide a la delegación que responda a las preguntas 27 y 28 de la lista de cuestiones y que indique, en particular, cómo piensa el Estado parte lograr el asentamiento de las poblaciones nómadas del interior del

país sin poner en peligro su modo de vida tradicional ni recurrir a una política de asimilación, y cuántas personas se ven afectadas por ese proyecto.

33. **El Sr. Kerdoun** pregunta qué medidas prevé adoptar el Estado parte para mejorar la formación de los profesores y aumentar la capacidad en las escuelas primarias, y si los idiomas afar y somalí se enseñan en las escuelas.

34. **El Sr. Sadi** pregunta si los derechos humanos se enseñan en las escuelas y si las escuelas privadas imparten una educación de mayor calidad que las escuelas públicas. Desea saber si el Gobierno de Djibouti es consciente de que una de las razones por las que las niñas abandonan la escuela es la falta de higiene y saneamiento en las escuelas.

35. **El Sr. Kedzia** desea conocer las medidas que el Estado parte tiene previsto adoptar para promover el acceso universal a Internet, permitiendo así que los grupos desfavorecidos tengan acceso a la educación, las oportunidades de empleo y otros servicios disponibles a través de Internet.

Se levanta la sesión a las 12.45 horas.